

EDITORIAL

Derechos humanos en China

El gobierno comunista chino, no obstante algunos gestos formales de apertura a los criterios básicos en materia de derechos humanos, como su reciente adhesión al Acuerdo Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, mantiene férreamente su política interna represiva y en último término prescinde de la opinión pública mundial.

Este año se cumplen cincuenta desde el establecimiento del actual régimen con la derrota del ejército nacionalista del Presidente Chiang, quien se refugió en Taiwán dando origen al proceso de desarrollo de esa isla. El sistema implantado desde entonces en Beijing ha tenido sus propias crisis, siendo la más grave la del período de la Revolución Cultural, que llevó la lógica marxista a sus extremos y paralizó por años la evolución del inmenso país, pero en el último período nuevas estrategias económicas y un incipiente capitalismo permitían

esperar que también en el plano político hubiera cambios en el sentido de una mayor liberalización.

De hecho, la prensa norteamericana abundó en los últimos meses en calificativos optimistas y llegó a hablar de una "primavera de Beijing". Pero los recientes arrestos y condenas de disidentes, seis de ellos acusados de intentar la creación de un partido político opositor, han cambiado esa perspectiva. El propio Jiang Zemin ha reiterado que cualquier manifestación opositora será "arrancada de raíz". En 1999 se cumplen, además, diez años de la sangrienta represión de la plaza Tiananmen y uno de los líderes juveniles de entonces acaba de ser condenado a once años de cárcel, luego de ser detenido a mediados de año, el mismo día en que Clinton, esperanzado en una apertura política, se reunía con Jiang Zemin.

También ahora se ha informado de nuevos castigos y torturas para sacerdotes

y fieles católicos que se resisten a someterse a la "Asociación Patriótica" que el Estado organizó como iglesia oficial.

Es evidente que las distintas realidades de ese enorme país, que van desde la miseria de algunas regiones del interior a la riqueza de Hong Kong, obligan a mantener una fuerte autoridad política que permita una integración y un desarrollo progresivos. El propio conflicto con Taiwán —último territorio por recuperar después de Hong Kong y Macao—, que se ha agudizado estos días, hace pensar en soluciones lentas pero de largo plazo. Todo eso es comprensible, pero la actual conciencia internacional en materia de derechos humanos descarta los procedimientos del viejo imperio que han heredado los gobernantes comunistas y exige un respeto a las personas, disidentes o no, que China Popular está lejos de cumplir.

